

San Miguel, doce de mayo de dos mil veinticinco.

Al folio 14: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que recurre de amparo el abogado Carlos Cáceres Horta, en favor de Carlos Jaime Oscar de la Cruz Varela, chileno, cédula de identidad 3.741.560-K, en contra de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros señores Alejandro Eduardo Rivera Muñoz, Sergio Guillermo Córdova Alarcón y el abogado integrante señor Nicolás Antoine Stitchkin López, por la dictación de la resolución de 9 de abril de 2025, en causa Rol 1211-2025 Penal, que confirmó la resolución apelada de 3 de marzo de 2025, dictada en causa RIT 10.363-2019, seguida ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo planteada por la defensa.

Refiere que dicha resolución afecta la libertad personal del recurrente al dejar vigente un procedimiento penal en que se decretó la medida cautelar de arraigo nacional, en circunstancias que dicho procedimiento debió terminar por sobreseimiento definitivo.

Expone que la Octava sala de la Corte de Santiago consideró que la recta interpretación del artículo 96 del Código Penal prevalece sobre cualquier norma adjetiva, inaplicando en la especie una norma legal expresa, cual es la prevista en el artículo 233 letra a) del Código Procesal Penal, que establece que la formalización de la investigación suspende la prescripción de la acción penal.

Reitera que, de haberse realizado una correcta interpretación de la ley, necesariamente habrían declarado el sobreseimiento definitivo por la causal de la letra d) del artículo 250 del Código Procesal Penal, dado que entre los hechos y la fecha de la formalización había transcurrido con creces el plazo de 5 años de prescripción de la acción penal, sin interrupciones.

Solicita, en definitiva, acoger la presente acción constitucional y declarar la prescripción de la acción penal, decretando el sobreseimiento definitivo de la causa.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NELXUVSFRM

Segundo: Que, evacuando informe doña Francis Fell Franco, jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, señala que en dicho tribunal se tramita la causa RIT 10.363-2019, en la que el 16 de octubre de 2019 se presentó querella en contra del recurrente por los delitos de estafa y apropiación indebida, previstos y sancionados por los artículos 467 y 470 N°1 del Código Penal, ambos en grado de desarrollo consumado, por hechos acaecidos el 18 de marzo de 2019, la que fue declarada admisible el 21 de octubre de 2019.

Agrega que, en audiencia de 5 de febrero de 2025, el Ministerio Público formalizó la investigación por los delitos de estafa y apropiación indebida, añadiendo que se decretó como medida cautelar el arraigo nacional y se fijó audiencia de salida alternativa y de sobreseimiento definitivo con el fin de discutir la prescripción de la acción penal.

Refiere que el 3 de marzo del presente, se llevó a cabo la audiencia señalada, en la cual no se dio lugar al sobreseimiento definitivo, por estimarse que la acción penal no se encuentra prescrita, según resolución del siguiente tenor:

“PRIMERO: Que la defensa solicita el sobreseimiento definitivo por prescripción de la acción, hacen ver que desde la época de los delitos imputados, el último de ellos de octubre del año 2019, funda su petición que desde marzo del año 2019 a la época de la formalización, esto de febrero del año 2025, ha transcurrido con creces el plazo de 5 años por tratarse de un simple delito, de modo entonces que siendo el único evento que puede interrumpir el plazo de prescripción, la formalización de la investigación procede dictarlo en favor de sus representados. Añaden que ambos no tienen anotaciones en su extracto de filiación que impida computar el plazo, así como tampoco salidas del territorio nacional que afecten dichas circunstancias.

SEGUNDO: Que el Ministerio Público se opone a la alegación planteada por la defensa hace ver que en definitiva, la querella también tiene el efecto de interrumpir el plazo de prescripción y consultado acerca de la posibilidad de que se hubiera paralizado entre el año 2019 hasta el año 2025 el proceso en favor de los imputados, hace ver que se decretaron distintas diligencias de investigación durante el año 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, para efectos de ubicar a los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NELXUVSFRM

imputados, apercibirlos y proceder a la formalización. De modo entonces que no se ha paralizado el curso de la investigación y por esa razón entonces no ha transcurrido el plazo.

TERCERO: Que, ante este escenario, lo primero que el Tribunal debe despejar es que efectivamente, como señalan las defensas, la formalización de la investigación es un acto que al tenor de lo previsto en el artículo 233 del Código Procesal Penal, tiene el efecto de interrumpir el plazo de prescripción, porque expresamente la ley lo concede. Sin embargo, cierto es también que al tenor de lo previsto en el artículo 96 del código del ramo se indica que se interrumpe el plazo de prescripción una vez que se dirige el procedimiento en contra de una persona, y en ese sentido, la denuncia cuando es nominativa o en este caso la querella también tiene ese efecto, toda vez que al tenor de lo previsto en el artículo séptimo del Código Procesal Penal se le da la calidad de imputado a una persona desde que la acción se dirige en su caso. Que luego el mismo artículo 96 del Código Penal establece que sin embargo, una vez que se interrumpe el plazo de prescripción, si éste se paraliza durante 3 años, sigue corriendo como si nunca se hubiera interrumpido y en ese sentido el Tribunal requirió al Ministerio Público información acerca de que fue lo que sucedió entre la interposición de querella y la comunicación de cargo de febrero del año 2025, informando que no se ha suspendido el proceso en favor de los imputados, toda vez que se realizaron distintas diligencias de investigación para ubicar.

CUARTO: Que, ahora bien, no siendo la formalización el único evento que tiene el efecto de interrumpir el plazo de prescripción y habiéndose interrumpido cuando no se había enterado el tiempo mínimo necesario para declarar extinguida la acción por el paso del tiempo, sumado además que requerido información al Ministerio Público indica que tampoco se ha suspendido el proceso por más de 3 años como para estimar al Tribunal que aquel plazo debe continuar corriendo en favor de los imputados, el Tribunal no está en condiciones de hacer lugar a la petición de las defensas, toda vez que la querella también ha tenido el mismo efecto que la formalización. Por esas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo séptimo, 233, 250 del Código Procesal Penal, 15 N° 1, 467, artículo



96, artículo 93 y 102 del Código Penal, el tribunal no da lugar a la petición de la defensa por estimar que a la época de la interposición de la querella y luego a la época de comunicación de cargos, no habiéndose suspendido el plazo, no se entera el de 5 años que exige la ley por tratarse de un simple delito”.

Añade que el 4 de marzo de 2025, la defensa apeló en contra de la resolución que negó lugar al sobreseimiento, precisando que el 9 de abril del presente la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución dictada por el tribunal.

Tercero: Que evacuando informe Alejandro Rivera Muñoz, ministro titular, Sergio Córdova Alarcón, ministro suplente y Nicolás Stitchkin López, abogado integrante, todos de la Corte de Apelaciones de Santiago, indican que la Octava Sala conoció el 9 de abril pasado del ingreso Penal N°1211-2025, referido a un recurso de apelación deducido por la defensa respecto de resolución del Cuarto Juzgado de Garantía, que desestimó sobreseer definitivamente la causa por prescripción de la acción penal.

Refieren que de manera unánime decidieron mantener la decisión, al coincidir con sus fundamentos. Precisan que para ello tuvieron presente lo dispuesto en el artículo 96, norma de fondo del Código Penal, estimando que la disposición establece como efecto general la suspensión de la prescripción de la acción penal desde que el procedimiento se dirige en contra del delincuente, sin que obste a dicho efecto lo dispuesto en el artículo 233 del Código Procesal Penal, norma adjetiva a propósito de la formalización, en que efectivamente se establece como uno de sus efectos la suspensión del plazo prescriptivo, pero, en ningún caso, sería la única actuación que lo genera.

Agregan que se expresó que, de seguirse la tesis propuesta por las defensas, se dejaría sin contenido una regla penal de fondo, toda vez que es perfectamente posible anticipar el inicio del procedimiento en los términos del artículo 96 del Código Penal por otras actividades igualmente suspensivas, como actuaciones investigativas judicializadas, denuncias o querellas previas nominadas, entre otras, y que sean previas a la formalización, tal como habría ocurrido en el presente caso, con la querella de 16 de octubre de 2019.



Argumentan que ello se encuentra en armonía con lo dispuesto en el artículo 7° del código adjetivo, que define la calidad de imputado.

Hacen presente, finalmente, que en su resolución hicieron referencia a que la transcendencia procedimental planteada cobra especial relevancia, solo a modo ejemplar, en materia tributaria, a partir de la querella criminal nominada, lo que se comprueba con la consecuencia que su ausencia tiene en esas materias para poder formalizar una investigación, lo que constituye una exigencia indispensable para poder deducirla, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 162 del Código Tributario, en el sentido de reafirmar la idea de los efectos suspensivos en el ejercicio de la acción previa interposición de una querella.

Cuarto: Que el artículo 21 de la Constitución Política de la República establece que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Agrega su inciso tercero que el mismo recurso podrá ser deducido a favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

Quinto: Que, por la presente vía, se ha denunciado como ilegal la resolución dictada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el 9 de abril último, que resolvió confirmar la resolución de 3 de marzo de 2025, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo planteada por la defensa.

Sexto: Que una primera cuestión que se debe dejar asentada, es que lo deducido en autos constituye un arbitrio extraordinario, un remedio procesal de emergencia que, por una vía desformalizada y altamente expedita, persigue ser eficaz respecto de conculcaciones actuales o inmediatas de la libertad ambulatoria y/o seguridad individual de una persona. Tal contexto, es obvio, no se equipara ni puede confundirse con la creación por parte del litigante que busca favorecerse de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NELXUVSFRM

una nueva instancia, vale decir, de un grado de conocimiento y fallo de lo ya analizado y decidido por el tribunal o tribunales naturalmente asignados en la ley, por los respectivos grados o fases recursivas procesalmente reconocidos en el ordenamiento jurídico, máxime si, como en el presente caso, estos fueron ejercidos por los intervinientes.

De lo anterior se sigue que esta sede constitucionalmente instituida no es idónea para los fines propuestos por quien ha accionado, conclusión que desde ya obsta al acogimiento del amparo incoado.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, a mayor abundamiento, y a fin de despejar el cuestionamiento promovido por quien recurre, se observa propicio exponer que, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 93 y 96 del Código Penal y 7° del Código Procesal Penal, la querella dirigida en contra del amparado presentada el 16 de octubre de 2019, por los delitos de estafa y apropiación indebida, tuvo como uno de sus efectos el de suspender el plazo de la prescripción de la acción penal. Lo anterior, atendido que, indudablemente, a partir de ella el procedimiento fue dirigido contra él -artículo 96 del Código Penal-, adquiriendo la calidad de imputado en los términos del artículo 7° del Código Procesal Penal, y sin que conste en los antecedentes que, en una fase extra judicial regida primordialmente por los dictados del Ministerio Público, se haya paralizado por tres años o más, de modo que no cabe cuestionarse el eventual decaimiento de la antedicha suspensión por una inactividad absoluta que no aparece esgrimida formal o tácitamente en los antecedentes. En otras palabras, si la investigación, encaminada en contra del amparado no cesó de diligenciarse por el lapso referido, queda evidenciado, sin lugar a dudas, que el tiempo prescriptivo en referencia se mantuvo en suspenso.

Octavo: Que, por las razones anotadas precedentemente, el recurso de amparo deducido en favor de Carlos Jaime Oscar de la Cruz Varela no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, **se rechaza,**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NELXUVSFRM

sin costas, el recurso de amparo deducido en favor de Carlos Jaime Oscar de la Cruz Varela, en contra de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°522- 2025 Amparo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NELXUVSFRM

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Alejandra Pizarro S., Celia Olivia Catalan R. y Abogada Integrante Paula Manzo S. San Miguel, doce de mayo de dos mil veinticinco.

En San Miguel, a doce de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NELXUVSFRM